

C.A. de Santiago

Santiago, tres de mayo de dos mil veintitrés.

A los folios 20 y 21, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don **Fernando Toro Mora**, quien interpone recurso de protección en contra del **Consejo para la Transparencia** por el acto ilegal y arbitrario ejecutado mediante la dictación de las resoluciones N° 295 de fecha 03 de agosto de 2022 y N° 411 de 24 de octubre de 2022, en las cuales se le aplicó una sanción consistente en una multa ascendente al 20% de su remuneración mensual, por la supuesta configuración de la hipótesis de denegación infundada del acceso a la información, prevista en el artículo 45 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública y el rechazo del recurso de reposición interpuesto en contra de dicha resolución, lo cual priva y perturba sus garantías constitucionales protegidas en los numerales 2, 3 y 24, del artículo 19 por la Carta Fundamental.

Expone que es médico cirujano y a partir del 1 de junio de 2020 debió asumir la subrogancia de la Dirección del Hospital Padre Alberto Hurtado, toda vez que la autoridad que estaba en funciones debió confinarse en su domicilio, por razones de salud.

Refiere que se definió priorizar y orientar los recursos humanos a la atención de pacientes, considerando la extraordinaria fuerza con la que azotó la pandemia, que extendió sus efectos críticos hasta muy avanzado el año 2021.

Señala que en la Sesión Ordinaria N° 1217, de 23 de septiembre de 2021, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, dispuso la instrucción de una investigación sumaria



en el Hospital Padre Alberto Hurtado Rol S-19-2021, por el otorgamiento, en seis casos, de respuestas no ajustadas en tiempo a la Ley de Transparencia, que se presentaron en el período de tiempo comprendido entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, que podrían constituir una infracción a su artículo 45.

Arguye que la arbitrariedad e ilegalidad se configura al no considerar que los recursos humanos destinados a dar respuesta a los requerimientos, se destinaron a salvar la mayor cantidad de vidas posibles, adoptando las medidas administrativas tendientes a dicho objetivo, consistentes en el abastecimiento de equipos, medicamentos e insumos, provisión de servicios, contratación y gestión de personal, reasignando funciones de aquellos servidores a cargo de la función de responder requerimientos como los que sustentan los actos impugnados.

Por otro lado, sostiene que la extemporaneidad de la respuesta no se encuentra recogida en el artículo 45 de la Ley N° 20.285, la cual exige una “denegación infundada” en los términos previstos por el artículo 16 de la citada ley, vulnerando en consecuencia el principio de tipicidad que debe regir los actos administrativos sancionatorios.

Alega que la recurrida le dio un trato abiertamente discriminatorio, ya que en la misma investigación a la cual fue sometido, se resolvió absolver a la coimputada Sandra Pizarro Catalán, aplicando el principio que a lo imposible nadie está obligado, en razón de las circunstancias de fuerza mayor que debió enfrentar el país.

Finalmente, solicita se declaren ilegales y arbitrarias las resoluciones impugnadas, dejándolas sin efecto, como también las



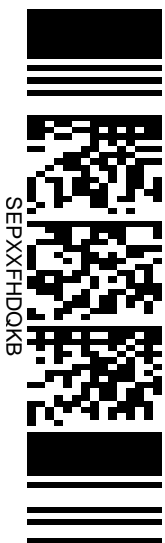
multas que ellas aplican, ordenando lo mismo en relación a su publicación en el sitio electrónico del Consejo recurrido y del Hospital en el cual presta sus servicios y que se dispongan las otras medidas que se estimen pertinentes, con expresa condena en costas.

Segundo: Que comparece don David Ibaceta Medina, abogado, Director General del Consejo para la Transparencia, quien informa que luego de realizar una investigación sumaria en contra del Hospital Padre Hurtado, con fecha 25 de abril de 2022, se procedió a notificar el oficio de formulación de cargo, en su calidad de Jefe Superior de Servicio.

Indica que la conducta descrita transgrede lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 10, 14 y 16 del artículo primero de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; situación que configura la infracción descrita y sancionable en virtud del artículo 45 de la misma ley, según el cual: *“La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración”*.

Por lo anterior, señala que se le aplicó la sanción de multa ascendente al 20% de la remuneración mensual percibida durante el mes en que el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia adoptó el acuerdo de ratificar la propuesta de Vista Fiscal y la sanción respectiva, correspondiente al mes de mayo de 2022.

En cuanto al fondo, refiere en primer término que el presente recurso de protección debe ser rechazado, por cuanto excede las materias que deben ser conocidas por la acción de protección, atendida su naturaleza cautelar.



Arguye que la mera diferencia interpretativa en el artículo 45 de la Ley de Transparencia, no transforma a los actos en ilegales y arbitrarios, en la medida que no se discute la efectiva existencia de infracciones reiteradas a las normas de acceso a la información pública.

Explica que la omisión de respuesta a requerimientos de acceso dentro del plazo contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, reiterada en 6 solicitudes de acceso, configura en términos específicos una omisión del cumplimiento de un deber actuación impuesto en términos expresos por la Ley de Transparencia, consistente en entregar la información, salvo que se invoque una causal de reserva o secreto, lo que en la especie no ocurrió, de modo que la falta de respuesta en tiempo y forma, se encuentra subsumida por la figura de denegación infundada, contemplada en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

En otro orden de ideas, el Director del Hospital, con ocasión del ejercicio de su cargo, tuvo y ha tenido conocimiento completo, cierto y directo respecto de los efectos que ha ocasionado la pandemia de COVID-19, por lo que, en cumplimiento a los principios de servicialidad, continuidad del servicio, eficiencia, eficacia y control de la administración pública, debió disponer de las medidas necesarias y conducentes para mantener un funcionamiento oportuno, eficaz y eficiente de esa repartición pública para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia dispuestas por la Ley de Transparencia, en especial, para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información,

Sostiene que la comparación que realiza el recurrente con la funcionaria que fue absuelta del cargo que se le formuló, es

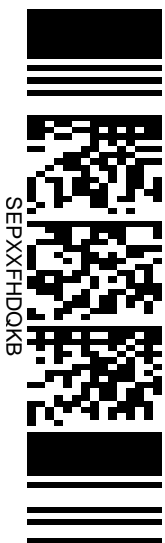


totalmente errada, pues aquélla le informó al recurrente el colapso que se presentaba en la gestión de SAIs, originado en la multiplicidad de funciones disímiles que se le asignaron, de lo cual resulta razonable comprender una inadecuada gestión de dicho sistema.

En cuanto a la supuesta infracción al principio de tipicidad, afirma que, en relación con la responsabilidad administrativa de los funcionarios, no resulta aplicable el principio de tipicidad, que es sustituido por una regla general de previsibilidad conforme a los deberes que vienen impuestos por sus respectivos estatutos y que las hipótesis de “denegación infundada de acceso a la información pública”, en los términos dispuestos en el artículo 45 de la Ley de Transparencia, no se limitan ni se agotan en la acción positiva del órgano regulado de dictar un acto administrativo en dicho sentido, ya que ello implica desconocer habituales prácticas omisivas, que redundan en el entorpecimiento injustificado del derecho de acceso a la información pública, implícitamente garantizado en el artículo 19 numeral 12 de la Carta Fundamental.

Finalmente solicita el rechazo de la acción de protección.

Tercero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección



del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: No existe controversia entre las partes que el acto recurrido corresponde a las resoluciones N° 295 de fecha 03 de agosto de 2022 y N° 411 de 24 de octubre de 2022, en las cuales se le aplicó a la recurrente una sanción consistente en una multa ascendente al 20% de su remuneración mensual, por la supuesta configuración de la figura de denegación del acceso a la información, prevista en el artículo 45 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública y se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de dicha decisión, respectivamente.

Quinto: Del mérito de los antecedentes agregados en esta causa y en especial lo informado por las partes, resultan ser hechos no controvertidos que:

1. En la Sesión Ordinaria N° 1217, de 23 de septiembre de 2021, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, dispuso la instrucción de una investigación sumaria en el Hospital Padre Alberto Hurtado Rol S-19-2021, por el otorgamiento en seis casos de respuestas no ajustadas en



tiempo a la Ley de Transparencia, que se presentaron en el período de tiempo comprendido entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, que podrían constituir una infracción al artículo 45 de la Ley de Transparencia.

2. Con fecha 25 de abril de 2022, se procedió a notificar al recurrente la formulación de cargo emanado del Jefe Superior de Servicio, consistente en: *“A don FERNANDO MAURICIO TORO MORA, Director del Hospital Padre Hurtado, en su calidad de Jefe Superior de Servicio, se le formula cargo por haber denegado infundada y reiteradamente la entrega de la información solicitada al Hospital Padre Hurtado, en los plazos y formas establecidos en la Ley N°20.285, en las solicitudes que se indicarán más adelante, como consecuencia de no haber ejercido ni adoptado, respecto del personal de su dependencia, medidas eficaces de control jerárquico, de supervisión, de dirección y coordinación propios de su cargo, que permitiesen dar cumplimiento a la entrega de la información solicitada en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.285, transgrediendo el principio de transparencia de la función pública, que implica, entre otras conductas, el facilitar el acceso a cualquier persona a la información de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, a través de los medios y procedimientos que al efecto establece la Ley N°20.285; a saber:*
Solicitud de fecha 12 de enero de 2021, cuyo plazo venció el 09 de febrero de 2021 y la respuesta se entregó el 11 de febrero de 2021.



Solicitud de fecha 18 de enero de 2021, cuyo plazo venció el 15 de febrero de 2021 y la respuesta se otorgó el 16 de marzo de 2021

Solicitud de 18 de enero de 21, cuyo plazo venció el 15 de febrero de 2021 y la respuesta se otorgó el 16 de marzo de 2021.

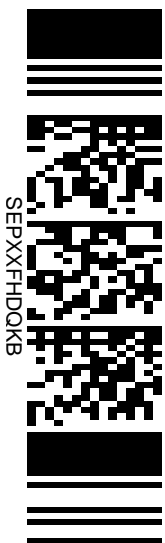
Solicitud de 26 de enero de 2021, cuyo plazo venció el 23 de febrero de 2021 y la respuesta se entregó el 03 de mayo de 2021

Solicitud de 29 de enero de 2021, cuyo plazo venció el 26 de febrero de 2021 y la respuesta se entregó el 28 de abril de 2021.

Solicitud de 08 de febrero de 2021, cuyo plazo venció en 08 de marzo de 2021 y la respuesta se entregó el 04 de mayo de 2021”.

3. En las resoluciones N° 295 de fecha 03 de agosto de 2022 y N° 411 de 24 de octubre de 2022, se le aplicó al recurrente una sanción consistente en una multa ascendente al 20% de su remuneración mensual, por la supuesta configuración de la figura de denegación del acceso a la información, prevista en el artículo 45 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública y se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de dicha decisión, respectivamente.

Sexto: Que en cuanto a la legislación aplicable corresponde indicar el artículo 4 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública dispone: *“Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar*



estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública.

El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley”.

Por su parte, el artículo 10 del citado cuerpo normativo prescribe: *“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.*

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.

Asimismo, el artículo 14 de la legislación en análisis señala que: *“La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12.*

Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido



deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos”.

Además, el artículo 16 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública establece que: *“La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, estará obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley.*

En estos casos, su negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos.

Además, deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.

La resolución denegatoria se notificará al requirente en la forma dispuesta en el inciso final del artículo 12 y la reclamación recaída en ella se deducirá con arreglo a lo previsto en los artículos 24 y siguientes”.

Por último, el artículo 45 de la misma ley, dispone que: *“La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, que hubiere denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16, será sancionado con multa de 20% a 50% de su remuneración”.*

Séptimo: Que, por otro lado, el artículo 27 de la Ley N° 19.880, aplicable a la actividad de la Administración, conforme a las reglas generales, dispone que *“salvo caso fortuito o fuerza mayor, el*



procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. De esta forma, la norma anterior deja claro la admisión del caso fortuito o la fuerza mayor en materia administrativa.

Octavo: Que, en efecto, el artículo 45 del Código Civil establece que *“se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”*

Noveno: Que en dicho contexto, la Contraloría General de la República, en su Oficio N° 3610 de 17 de marzo de 2020, establece que *“A la luz de lo prescrito por el artículo 45 del Código Civil, norma de derecho común y de carácter supletorio, el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos, permiten adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir de cumplimiento de ciertas obligaciones o plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por ordenamiento jurídico.*

En la especie, el brote del Covid-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los



servicios públicos críticos, esto es, aquellos cuyas funciones no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad”.

En este sentido, agrega que “(...) los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo”.

Décimo: Que, en este orden de ideas, el Ministerio de Salud, a través de diversos actos administrativos, dispuso medidas sanitarias por brote de Covid-19, entre las que se encuentran aquellas consistentes en cuarentena obligatoria y cordones sanitarios para distintas zonas del territorio nacional.

En virtud de lo razonado precedentemente, es un hecho público y notorio que la pandemia del Covid-19, constituye un caso fortuito o fuerza mayor, el cual ha afectado gravemente a nuestro país y sus habitantes, circunstancias que claramente habilitó a sus autoridades a adoptar medidas excepcionales, con la finalidad de resguardar los derechos de los interesados.

Undécimo: Que en consecuencia, debe reconocerse la importancia que la emergencia sanitaria tuvo en las actividades no sólo privadas sino también públicas, especialmente de los centros hospitalarios, obstaculizando todo su quehacer, tanto por la circunstancias de tener que adecuar todos los servicios a una nueva forma de proceder, como por el imperativo de reorientar los recursos que debió realizar el Estado para enfrentar las consecuencias de haber vivido una de las situaciones más excepcionales de los últimos años.

Duodécimo: Que, no obstante que el examen que se realiza por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a



evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, dicho proceder no impide el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración respecto de la legalidad y razonabilidad de sus actuaciones, revisión que no importa que por esta vía cautelar se supervisen materias relativas al fondo de las decisiones adoptadas en el marco y en el ejercicio de las facultades propias del recurrido, analizándose por tanto, la razonabilidad y proporcionalidad que deben revestir sus pronunciamientos (Corte Suprema Rol N° 18.823-2019, N° 97.284-2020 y Rol N° 150.201-2020).

Décimo tercero: De lo anterior, se desprende que el actuar de la autoridad recurrida no aparece revestido de la correspondiente razonabilidad - esto es, de un análisis lógico-racional de justificación de las diferencias establecidas con la consecuente falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón-, dada la especial situación de caso fortuito en que se encontró inserto el recurrente, por cuanto la emergencia sanitaria permite colegir y justificar la existencia de dificultades para el cumplimiento de determinadas obligaciones como la reprochada -entrega oportuna de la información requerida-, dado que se afectó el funcionamiento de todos los servicios públicos y la normal circulación de la población en general, tornándose en una situación anormal, lo que ameritó, por tanto, la adopción de medidas extraordinarias, que implicaron la alteración del normal funcionamiento de los servicios públicos.

Lo anterior cobra particular relevancia el caso de autos, en atención a la especial naturaleza de los servicios prestados por el recurrente, profesional de la salud, desempeñando funciones



directivas en un hospital perteneciente a la red pública, es decir, el sector más afectado del aparato estatal por el impacto de la pandemia provocada por el COVID – 19.

Décimo cuarto: Que, el principio de igualdad ante la ley -por equiparación- indica que quienes están en similares circunstancias deben ser tratados de la misma forma -situación jurídica equivalente-, cuestión que no se tuvo en cuenta por parte de la autoridad recurrida.

En efecto, si bien le corresponde en primer término al Consejo para la Transparencia velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, aquello necesariamente debe implicar que frente a las facultades sancionatorias que le corresponden, debe tener en consideración las circunstancias concretas, más aún si aquéllas son de público conocimiento, debiendo las situaciones anómalas -en la especie, el caso fortuito o fuerza mayor aludidos-, ser tenidos en cuenta al ejercer la función protectora que garantiza el derecho fundamental.

Décimo quinto: Que, luego de lo dicho, estima esta Corte, que la aplicación de la sanción que mediante la interposición del presente arbitrio se cuestiona, no consideró las razones de fuerza mayor en que se vio inserto el recurrente, las que le fueron inimputables, por lo que se torna en arbitraria la resolución recurrida por no resultar razonable y, por tanto, ilegal.

De esta forma, el actuar de la recurrida implica desconocer las dificultades que tenía el actor para dar cumplimiento en tiempo con la entrega de la información que, en su oportunidad, le fuere requerida, en las circunstancias de emergencia sanitaria, lo que se traduce en una ausencia de razonabilidad y vulneración de la



garantía de igualdad ante la ley -artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República-, desde que le deja en una situación de desmedro respecto de otros administrados que se encontraron en presupuestos fácticos distintos a los tenidos por ciertos.

Décimo sexto: Que, por otro lado, y a mayor abundamiento, aun cuando se reconoce una mayor flexibilidad de la aplicación del principio de tipicidad en materia administrativa sancionatoria que en sede penal, claramente la lectura del citado artículo 45- que es la norma invocada en la especie- permite advertir que la conducta proscrita está constituida por la denegación de la información requerida, mas no de la que fuere entregada de manera tardía.

En este orden de ideas, no puede desconocerse que la tardanza del recurrente a cargo del citado hospital en entregar las respuestas adecuadas en seis casos -en el marco del ejercicio del acceso a la información pública-, no se encuentra revestida de la gravedad suficiente para estimar procedente la sanción aplicada, dado que el funcionario que por esta vía acciona, no omitió la entrega de la información que se solicitara sino que sólo la retardó más allá del plazo que le fuera requerido, estimándose que la decisión sancionatoria se aleja de la proporcionalidad que el legislador exige para la aplicación de sanciones en el ámbito público, criterio que también ha sido aplicado por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 14 de marzo de 2023, Rol N° 135.620-2022..

Décimo séptimo: Que, al resultar manifiesto que la actuación de la autoridad recurrida lo ha sido sin ponderar adecuadamente las especiales circunstancias que debió enfrentar el



actor producto de la pandemia, que permiten justificar la entrega tardía de la información solicitada, el recurso será acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, **se acoge, sin costas**, la acción de protección impetrada por don **Fernando Toro Mora**, dejándose sin efecto las resoluciones N° 295 de fecha 03 de agosto de 2022 y N° 411 de 24 de octubre de 2022, dictadas por el Consejo para la Transparencia, y en su lugar se ordena a la recurrida dictar los actos administrativos pertinentes para restituir las cosas al estado previo a su dictación; debiendo eliminar las publicaciones de la medida dispuesta, efectuadas en medios electrónicos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

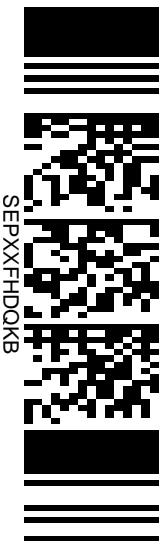
N°Protección-144875-2022.



Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quitral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Eduardo Nelson Gandulfo Ramírez.

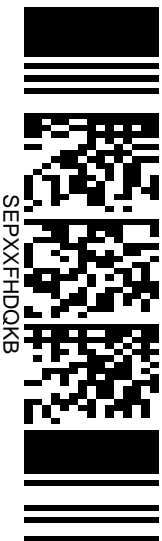
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, tres de mayo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Veronica Cecilia Sabaj E. y Abogado Integrante Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, tres de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a tres de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>